

Fornillo, Bruno 2007 “Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 22, septiembre.

Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/AC22Fornillo.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual¹

Bruno Fornillo*

«Los historiadores ven a los países desde la perspectiva del presente [...] pero cada país, en cambio, se ve a sí mismo con los ojos de su memoria»

50 años de historia
René Zavaleta

Apreciaciones preliminares

En el año 1952, la Revolución Nacional gestó al Estado moderno en Bolivia y el entramado institucional que nació tuvo al cogobierno como una de sus piedras fundantes. Desde entonces, la interrelación entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el proletariado minero vencedor del ejército oficial dio origen a una de las principales ideas-fuerza que nutrieron la memoria colectiva del país andino-amazónico, la cual representó en su variante práctica que los movimientos de matriz sindical

* Historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; CONICET y CLACSO.

codirigieran el país junto a –o en el lugar tradicional de– los partidos políticos, encarnando la concreción en el nivel estatal de la construcción contrahegemónica del campo popular. La cogestión enraizaba esta dinámica política en el proceso de trabajo, ya que los obreros participaban en todos los niveles de las empresas mineras recientemente nacionalizadas, motor de la estructura productiva. De hecho, Luis Tapia afirma la existencia de un modo singular de pensar la democracia en Bolivia, puesto que las visiones sobre el sistema político se fundaron en el derecho a intervenir los procesos de deliberación y toma de decisiones a nivel nacional desde los niveles básicos de autoorganización colectiva. Ni propiamente moderna –aunque embebida en la tradición socialista– ni propiamente “liberal”, la fisonomía del cogobierno es un producto “mestizo”, donde los sindicatos provocaron una fusión político-cultural que ahonda sus raíces en la persistente dimensión agraria y comunitaria (Tapia, 2006). Las condiciones estructurales en las que se desenvuelve la presidencia de Evo Morales distan de parecerse a las que abrigaron a esta “forma estatal” en sus sucesivas manifestaciones históricas y, sin embargo, su huella aparece como un índice problemático para dar cuenta de la actual relación entre organizaciones sociales y Estado; incluso esta misma diferencia lleva a la pregunta por su vitalidad actual.

El Movimiento al Socialismo (MAS) se concibe a sí mismo como el gobierno de los movimientos sociales; de ellos partió una nueva elite política dispuesta a tomar las riendas del país. Nos proponemos dar cuenta de la marcha concreta que el cogobierno presenta en el devenir del Poder Ejecutivo, puesto que será aquí donde pueda o no plasmarse, debido a que es en esas prácticas cotidianas donde día a día se prueba su materialidad, teniendo en cuenta que su formato final se volverá más nítido luego del recorrido sinuoso que lleva la Asamblea Constituyente. De modo que abordaremos ciertas dinámicas del sistema de gobierno donde actúan las organizaciones sociales, particularmente un panorama del Ministerio de Aguas y del de Minería en este año y medio de gestión, habida cuenta de que el Poder Legislativo está fuertemente subordinado al Ejecutivo. Intentaremos luego sopesar los atisbos de una nueva institucionalidad en disonancia con el consolidado patrón neocolonial, con las dinámicas del discurso liberal-mercantil fuertemente arraigado en los últimos años.

El nuevo Ministerio del Agua

Al asumir Evo Morales, resultaba más que claro que la problemática del agua había constituido un punto neurálgico en el ciclo político que lo llevó al poder: “La emergencia de un conjunto de tomas de posición y de propuestas de parte de las organizaciones campesinas, indígenas, vecinales, regantes –afirmaban desde el Ejecutivo– ahora se plasma en la creación del Ministerio del

Agua". A su cabeza se nombró a Abel Mamani, quien siendo presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) alimentó la movilización alteña. A primera vista, pues, parecía que se apuntaba a tejer un vínculo orgánico con la estructura de movilización de la ciudad, pero el flujo de relaciones tendió a tomar otros carriles, puesto que Mamani fue inmediatamente declarado "persona no grata" por los nuevos referentes de la FEJUVE bajo la consideración de que no había consultado a las bases y que los estatutos de la organización barrial prohíben la participación en política privilegiando "el trabajo cívico".

El objetivo central del Ministerio ha sido confirmar la definitiva expulsión de Aguas del Illimani, distribuidora privada de agua de La Paz y El Alto. A principios de 2007, tras una "salida amigable", es decir, gracias a un acuerdo en el que la empresa aceptaba la necesidad de irse y recibía pocos capitales en compensación pero no era expropiada, se creó la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que actualmente se encuentra en vistas a diseñar su futuro perfil mediante una comisión compuesta por representantes de las municipalidades de El Alto y La Paz, de ambas FEJUVES y del Ministerio de Aguas. A la hora de definir el término *empresa social*, los objetivos que la guían parecen ser más bien moderados, como ampliar los plazos de pagos para obtener la instalación del servicio; y otro tanto puede decirse de la instancia de control social, a la que referencian como órgano de inspección anticorrupción y de presentación de iniciativas ante la dirección, un esquema blando siempre proclive a las injerencias corporativas y al nepotismo en la designación de cargos, como suele afirmarse que aconteció con la empresa estatizada en Cochabamba (Mondaca, 2006). Es que, sea como fuese, las perspectivas están un tanto alejadas del proyecto que el mismo Abel Mamani presentó cuando comandaba las protestas de 2005 buscando la expulsión de la compañía francesa, donde sería una asamblea articulada en todo el territorio alteño la que se situaría en el vértice superior del esquema organizativo de la nueva empresa y le prescribiría su rumbo.

Si enfocamos la participación popular y de las agrupaciones en la recientemente creada estructura del Ministerio, existen dos instancias específicas cuyo lugar en el organigrama político administrativo las sitúa entre la cúpula ministerial y los viceministerios. La primera de ellas es el Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG) que tiene por finalidad específica elaborar un nuevo marco legal para la utilización de los recursos hídricos; una vez cumplida esta tarea será disuelta. El preproyecto de ley elevado a la Constituyente da cuenta de una nueva cosmovisión acerca del medio ambiente. En el intento por reemplazar la "lógica empresarial" que primaba, se retoma la misma consigna de la "Guerra del Agua" de 2000: "El agua para la vida", promoviendo así las concepciones tradicionales de las comunidades indígenas y pueblos originarios. De esta manera, los recursos naturales se entienden

atravesados por lógicas culturales, como lo es su carácter expresivo de la “reciprocidad”. En suma, una cosmovisión que aparece asociada a la gestación de un “Estado social y comunitario”. En paralelo, el Ministerio de Aguas es el único que cuenta con un dispositivo específico y permanente de relación con los movimientos sociales: el Concejo Técnico y Social –creado mediante la Ley de Organización del Poder Ejecutivo–, “abierto a la participación de las organizaciones sociales, directamente vinculadas a la temática del agua, con el objetivo de definir, participar y opinar sobre las políticas públicas”. Durante el año 2006, ha ido elaborando sus estatutos y reglamentos pero se halla atado a una serie de dilemas: si son los técnicos o los referentes de las organizaciones quienes lo rigen, cómo paliar la falta de participación de movimientos imbuidos de la temática como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia o el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, o de otros que prefieren no participar, y también la ausencia en la discusión de temas sustantivos; todos elementos que llevan a que se encuentre, a mediados de 2007, tras un tiempo de prueba, en un período de readecuación.

Los actores sociales más importantes del sector no están a tono con la política que parte del Poder Ejecutivo. La nueva gestión de la FEJUVE encuentra fuertes disidencias de algunos distritos –4 de los 9 no fueron proclives a su designación– y serias dificultades para movilizar a sus bases, imposibilidad comprobada en los sendos intentos de protesta fallidos para destituir al prefecto local. El poder revocatorio de la FEJUVE no encuentra su lugar en el nuevo contexto, lo que deriva en decisiones más bien individuales desligadas de las bases y en la búsqueda de canales institucionales de negociación. La falta de apoyo explícito al MAS y el carácter cívico hoy acentuado contribuyeron a que se vea relativamente relegada del entramado político nacional y del control de los recursos. La participación popular se mantiene en las reuniones vecinales, abocadas a las tareas locales en sintonía con un gobierno que perciben como suyo. Es que el gobierno absorbió las demandas populares desde el Estado; no es un dato menor que El Alto sea la primera ciudad del país que tendrá un sistema de conexión de gas domiciliario, que se haya llevado adelante –con sus bemoles– la expulsión de Aguas del Illimani y que se destinen recursos –magros pero presentes– para la infraestructura pública de los distritos. Asimismo, resulta significativo que una organización que ha sido central en la apertura del ciclo contencioso boliviano, que instaló la problemática acerca del manejo de los recursos hídricos y aportó una renovación a las prácticas políticas, la Coordinadora del Agua y la Vida, se sitúe hoy en la neta oposición. En palabras de su principal referente, Oscar Olivera, el “Ministerio no funciona de manera transparente y en movimiento porque es conducido unipersonalmente por Mamani”, y EPSAS está “peor que antes, hay partidocracia, un sindicato que se ocupa de sus intereses y la partici-

pación social no existe". En fin, como corolario a estas apreciaciones, decidieron que en el transcurso de estos meses finales de 2007 tomarán el Ministerio de Aguas con el propósito de obtener la renuncia de Mamani.

La minería: patrimonio del siglo XX hoy

Desde un comienzo, el primer mandatario procuró establecer una política consensuada con los diversos actores del sector, afirmando ante la Federación Sindical de Traba-

jadores Mineros de Bolivia (FSTMB) la necesidad de "refundar COMIBOL [Corporación Minera de Bolivia] y recuperar las minas para el pueblo", y ante la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) "una política de captación de 1.300 millones de dólares de inversión privada".

«El sector cooperativo buscó ocupar las instalaciones estatales que acrecentarían sus parajes en Huanuni encontrándose con la resistencia de los asalariados de la FSTMB»

No es de extrañar que, ante esta ambivalencia en el proyecto político-

económico para el área, durante ocho meses se haya sostenido un total de 16 reuniones infructuosas con los principales actores de la minería, interrumpidas por el pasaje a la acción de los cooperativistas que reclamaban los acuerdos sellados en la campaña electoral y diligencia al ministro Walter Villarroel, que juzgaban propio.

Efectivamente, la mañana del 5 de octubre de 2006, el distrito minero de Huanuni amaneció con una serie de dinamitazos que tronaron en las cercanías del socavón Santa Elena del cerro Posokoni, la reserva de estaño más importante de Bolivia. El sector cooperativo buscó ocupar las instalaciones estatales que acrecentarían sus parajes en Huanuni encontrándose con la resistencia de los asalariados de la FSTMB y, de esta suerte, el pequeño poblado se transformó durante dos días en un campo de batalla. Evo Morales afirmó: "Mis peores días en ocho meses de gobierno han sido ayer y anteayer, viendo a nuestros hermanos mineros metiéndose bala y dinamita", percibiendo a las claras las dimensiones que había adquirido el enfrentamiento: 16 mineros muertos, 61 heridos de gravedad, pérdidas materiales por 10 millones de dólares, además de sumir

en un estado de conmoción a todo el poblado minero y no menos a la sociedad boliviana. Tal como señala Dunia Mokrani, se aparecía a la memoria sindical como un “enfrentamiento fratricida”, cuyo desquicio general hay que rastrearlo en los efectos que la era neoliberal produjo al disolver la cohesión política y productiva que caracterizaba al proletariado del subsuelo, apenas resguardada por los mil obreros de Huanuni que buscaron revertir ininterrumpidamente el proceso de capitalización desde el único yacimiento que quedaba en manos del Estado (Mokrani, 2006).

Un atisbo de solución al conflicto comenzó con la propuesta de crear una empresa social totalmente estatal que recibiera inversión y contemplara la inmediata creación de 4.010 fuentes laborales para acoger a los cooperativistas locales bajo los alcances de la Ley General del Trabajo. Luego de realizar populosas asambleas, en las que varios señalaron que ya no quieren cargar la *k'epirina* (mochila de lona) porque prefieren percibir un salario, los cooperativistas de K'arazapato, Libres Relaveros y La Salvadora aceptaron la iniciativa del gobierno –ante la acusación de traidores de la matriz FENCOMIN. Es que ha sido la misma dislocación producida por la desaparición de la minería estatal en 1985, “relocalizando” a sus trabajadores, la que hizo crecer ampliamente al sector cooperativo, que lejos de sostener prácticas productivas igualitarias tendió a tejer relaciones laborales asimétricas e individuales, bajo pautas de funcionamiento cercanas a las de una pequeña empresa.

El gobierno aseguró el anuncio de una Nueva Política Nacional Minero Metalúrgica para el 31 de octubre, día clave en el que durante el año 1952 se habían nacionalizado las minas pertenecientes a los “barones del estaño” de Patiño, Aramayo y Rothschild, en el distrito minero de Catavi. Pero, sintomáticamente, una correlación tal del tiempo encontró un desenlace menos tajante, debido a que la proclama quedó postergada, alegando el Poder Ejecutivo falta de recursos y detalles a pulir, pero teniendo de fondo la oposición de los cooperativistas, cuyo líder potosino –Filomeno Qaqa Flores– afirmó en medio de una movilización que la organización instruyó que en “cada mina, en cada socavón, un minero esté armado”. Contribuyó también a ello la visita al Ministerio de funcionarios de la embajada de Suiza, quienes expresaron su preocupación por el anuncio de estatización de los centros mineros que fueron del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que estaban en manos de capitales de aquel país, o la de los representantes de la minería mediana, inquietos por la decisión de revertir concesiones que, aseguraron, dañaría la posibilidad de sostener proyectos grandes, como San Cristóbal y San Bartolomé, impulsados por capitales estadounidenses. Así, pues, se anunció el más modesto pero no poco importante Decreto Supremo 28901 que determinó que todo el cerro Posokoni esté bajo dirección y administración de la Corporación Minera de

Bolivia (COMIBOL), tornando cierta la terminante expresión del nuevo ministro Guillermo Dalence: “No más cooperativas en Huanuni”.

La alianza que unía a la minería cooperativista con el gobierno de Evo se disolvió abruptamente, mostrando claramente los límites corporativistas que orientaron la construcción del entramado político y electoral del MAS, disolución que no fue ruptura. Como era de esperar, emergió en contraparte una alianza estratégica con el sector asalariado de Huanuni, con la FSTMB. Pero, por sobre todas las cosas, el conflicto puso en primer plano la evidencia de que, aun en el mismo gobierno de Evo Morales y a pesar de un grado mayor de receptividad, es en la resistencia de los trabajadores del subsuelo donde nuevamente hay que encontrar las causas que posibilitaron refundar la actividad minera para que sea futuro patrimonio de todos los bolivianos.

Desde entonces, la política minera ha entrado en la sintonía de nacionalizaciones que busca armonizar el gobierno del MAS. Arribó a las altas esferas ministeriales una capa intelectual de arraigo nacionalista, con trayectoria en el determinante movimiento clasista de antaño. El actual ministro, Alberto Echazú, de reconocida militancia maoísta, afirma que el plan de acción estatal consiste en reconstruir la COMIBOL –cuyo actual presidente era el representante de la FSTMB en el directorio– sobre la base estratégica de Huanuni y Vinto –recientemente nacionalizada– yendo hacia la explotación de nuevos parajes y antiguos residuos aún productivos, sosteniendo finalmente una presencia sustantiva en todos los procesos económicos: extracción, industrialización y comercialización (actualmente en manos de empresas privadas que hacen una gran diferencia monetaria). Un trayecto que aguarda consolidarse con un nuevo código minero, cuyo adelanto fue la promulgación de un decreto el 1 de mayo de 2007 que declaraba a todo el territorio boliviano reserva fiscal minera. En las explotaciones de gran envergadura, como el yacimiento de hierro Mutún otorgado a la empresa india Jindal, se busca que prosigan grandes capitales con un margen de ganancias en provecho del Estado mayor que el corriente, y al sector cooperativista se trata de proveerlo de material técnico o de una suba leve del Impuesto Complementario Minero, a fin de no enemistarse con una organización que aglutina 60 mil trabajadores.

Igualmente, la articulación de los actores que pugnan por un proyecto común no se encuentra exenta de tensiones: a mediados de julio, la FTSMB fue reprimida y desalojada de la ruta a la fuerza; entre otras cosas, demandaba un nivel más amplio de autogestión en Huanuni, en parte conseguido al formarse una “comisión tripartita entre COMIBOL-trabajadores mineros-Ministerio de Minería [para contemplar] el pedido de participación, control social y fiscalización de los trabajadores” que contribuyera al diseño de la nueva Ley de Empresas Estatales. En estos casi dos años de gobierno, ha vuelto a ser la protesta la que ha posibilitado que un

dirigente de Huanuni afirma: “Nosotros tenemos una herramienta política, que es la relación con el poder a través del control obrero”.

Un análisis provisorio acerca del entramado estatal

En cierto sentido, habría que sortear la falsa evidencia que sitúa a las organizaciones sociales como los lugares esenciales de la política y al Estado como un condensado de la dominación, y una valoración análoga invirtiendo los polos, como puede desprenderse de la sorprendente denuncia por parte de voceros oficiales de que algunas movilizaciones esconden “motivos políticos”. Hoy, el sistema de gobierno inaugura época redefiniendo el lugar de los actores. Es que el umbral de pasaje que instauró el arribo del MAS al poder crea un panorama radicalmente diferente al que venía ofreciéndose cuando el gobierno era el claro antagonista que aglutinaba la acción conjunta de todos los movimientos sociales, brindándole una coyuntura modificada al ciclo contrahegemónico que despuntó en el año 2000. Una de las preguntas que habilita la nueva situación en relación con la problemática del cogobierno es cómo crear una nueva institucionalidad compuesta por los núcleos democráticos de participación popular.

En tanto dinámica general, es claro que el Poder Ejecutivo se encuentra fuertemente dominado por el talante presidencialista que embarga a la actual administración, lo que podría denominarse “evismo” (García Linera, 2006), una interrelación con las agrupaciones que pasa fuertemente por el Ministerio de la Presidencia, y con las cuales Evo Morales se reúne a diario escuchando sus demandas y necesidades. Incluso se ha creado una nueva instancia, el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, reemplazando el anterior Viceministerio de Conflictos; sin embargo, a pesar de buscar canales de articulación con las organizaciones, es un organismo que se ve envuelto en un destino de control y seguimiento del “carnaval de protestas” —en palabras de Evo— más que en uno de neta participación, todavía atado a los moldes tradicionales enquistados en la máquina estatal que marcan las fronteras de lo posible.

Una mirada similar puede verse sobre la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM). Surgida a principios de 2007, vino a institucionalizar los dos encuentros que Evo Morales —estable presidente de los sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba— tuvo durante 2006 con los movimientos sociales para evaluar su gobierno; pero aunque se presenta como una articulación política situada por encima de todos los poderes, incluyendo el sistema de gobierno y la Asamblea Constituyente, en la práctica está dominada por la figura de Evo Morales, y sus funciones son de fiscalización más que de dirección y discusión democrática. Si exploramos el tránsito actual del instrumento político, prevalecen las literales peleas por las *pegas* (pues-

tos de trabajo en el Estado), un estadio de deliberación más concentrado y un recorrido que tiende a acercarlo a la dinámica de los partidos clásicos en busca de su propia reproducción, a veces en ausencia de una intelectualidad orgánica con fines políticos claros. Es que los movimientos afines al MAS, que no son pocos, no dudan en afirmar que el gobierno les pertenece, lo cual se manifiesta en que una parte de ellos participa del entramado de decisiones, sobre todo su sector cupular, y que reciben los ingresos leves que el Estado antes paupérrimo comienza a obtener; un dirigente de reconocida trayectoria en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia comentó: “No necesitamos ningún otro cargo más, ya tenemos presidente”.

En el nuevo paisaje, la llegada al Estado puede derivar en que los factores de disociación del cogobierno se deban también a que las organizaciones sociales se encuentren privilegiando los intereses más particulares, corporativos, demandando al Estado la atención de las necesidades por mucho tiempo eclipsadas, y que el gobierno responda bajo mediaciones prebendales, acentuando los tintes piramidales de la construcción típica del poder político, prestando atención en demasía a las necesidades también reales de la gestión o la gobernabilidad. El mandato de Evo continúa siendo fiel al elemento articulador de los movimientos sociales que vino a reemplazar a la articulación cobista, la “agenda de octubre” resumida en nacionalización y Asamblea Constituyente —en un rumbo en el que adviene el futuro electoral. Ambos elementos prosiguen su marcha, como busca encaminarse la distribución de tierras en el oriente del país, y de este modo el instrumento político puede legitimarse y relacionarse de manera directa con una población que ve el intento de llevar adelante la consigna de *suma kamaña* (vivir bien) como dignidad primera de todos los bolivianos. No habría que olvidar que las tendencias recorren aquel “óptimo” de la ecuación social entre las determinaciones de la sociedad civil y el Estado, como pensaba René Zavaleta, donde las mediaciones hegemónicas son las organizaciones sociales, un movimiento indígena que constituye el gobierno y un heterogéneo entramado societal que aplaza una mayor participación atento a las reivindicaciones centrales cumplidas.

Sólo con escudriñar los ministerios visitados podemos ver que ha llegado al Estado una nueva elite política que pugna por modificar los patrones ideológicos que hasta hoy prevalecieron, dándole curso a un nuevo marco legal-nacional; pese a que el 80% de la administración pública proviene de gestiones anteriores y que la conducción arguye falta de “capacidad técnica” en los compañeros de ruta (ver entrevista a Álvaro García Linera en este volumen), la estrategia ha consistido en ocupar los núcleos centrales de decisión política; incluso se ha transitado un período corto de tiempo y además no se cuenta con experiencia en estas esferas. Es desde ellas que una oleada neodesarrollista apunta a otorgarle un papel

central al Estado en la economía, elemento que se plasmó en la fundación de EPSAS y la nacionalización del cerro Posokoni. De igual modo, están presentes los intentos ministeriales por generar procesos de mayor participación; aunque no acierten a encontrar un cauce claro, lo cierto es que en estas áreas las organizaciones sociales continúan siendo sujetos de primer orden a la hora de tornar posible un desarrollo legítimo. De hecho, sigue siendo la acción política de los núcleos autoorganizativos lo que fuerza una mayor ampliación de espacios autogestivos e incluso la aplicación de políticas progresistas, visto en las movilizaciones de Huanuni.

En su límite sombrío, “la reforma intelectual y moral” en marcha puede ser eclipsada por prácticas tenues que la tomarán retórica; el sistema de partidos tradicional, reconstruido luego de ser puesto en cuestión, y la oposición, renacida a través de pactos quizás innecesarios, como el hecho a mediados de agosto de 2007 entre el gobierno y el partido de derecha Podemos que ha debilitado profundamente la idea de Asamblea Constituyente “originaria”. Es decir, un gobierno que serpentea entre el consenso y el antagonismo, y que parece preferir la estructura de mandos estatal antes que los embriones de nueva institucionalidad que pudiese potenciar. Es en el MAS, como instrumento político y, al mismo tiempo, partido de gobierno, donde hay que situar el principal rol que puede acentuar una u otra tendencia, puesto que aparece con el papel dirigente del proceso. El reciente conflicto en Huanuni en julio de 2007 podría haberse evitado en la opinión tardía de los mismos que lo desencadenaron, dada la afinidad electiva que les otorga un proyecto común a los asalariados mineros y la gestión estatal, lo que reenvía tanto al carácter inestable como a la necesidad concreta de construir nuevas figuras de articulación política invocadas por los hechos. El resultado no ha dejado de ser favorable; las experiencias de autogestión, de control social que se afiancen en Huanuni se prevén como un modelo para pensar la Ley de Empresas Estatales. Son estas huellas de cogobierno las que, de manera imperfecta, hemos querido también describir. Si un país tan movilizad y institucionalizado desde abajo no acierta a crear mecanismos de democracia real, lo más probable es que se vea desbordado continuamente por los repertorios tradicionales de acción colectiva; de hecho, el número de protestas no ha mermado considerablemente.

Si de este análisis, que se quisiera apegado a los hechos concretos, pudiese desprenderse un balance donde las sombras superan a las luces, es porque presta demasiada atención a los hechos coyunturales. Pero poca duda cabe de que Bolivia es hoy el país donde todos los ámbitos de deliberación nombrados apenas tienen equiparación en el continente, y la política continúa –como lo es en definitiva– desplegándose en los espacios de autoorganización del archipiélago de movimientos que constituyen el núcleo del protagonismo popular, por eso se le exige al país andino lo

que va a seguir pudiendo dar, una clave para pensar la política emancipatoria de los nuevos movimientos sociales más allá del Estado, más acá de la hipótesis autonomista, y en relación con instancias macro de democracia colectiva; elementos presentes en la actual idea de cogobierno en Bolivia.

Bibliografía

- García Linera, Álvaro 2006 "El evismo: lo nacional-popular en acción" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VII, N° 19, enero-abril.
- Mokrani, Dunia 2006 "Pensar la política en Bolivia desde Huanuni" en *Pensamiento de los confines* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica) N° 19.
- Mondaca, Gonzalo 2006 "Control y participación social en la gestión de servicios públicos de agua y saneamiento" en *Todo sobre el agua* (Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia) Boletín N° 78.
- Tapia, Luis 2006 "La igualdad es cogobierno", mimeo.

Nota

1 El presente trabajo es un avance provisorio del informe final del proyecto "Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual. Un análisis socio-político del primer año de la experiencia del Movimiento al Socialismo en el poder (2006)", realizado a través de un subsidio obtenido en el concurso *Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructura de poder y*

concepciones del desarrollo en América Latina y el Caribe (2006), convocado por el Programa Regional de Becas de CLACSO. Las citas que forman parte del escrito son producto de un seguimiento de la realidad boliviana a través de periódicos de circulación nacional, entrevistas a informantes clave y otras fuentes primarias reunidas en el trabajo de campo.

Cómo citar este artículo

Fornillo, Bruno 2007 "Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 22, septiembre.

Palabras clave

Movimientos sociales y gobierno del MAS, cogobierno, agua, rol de la minería, Bolivia.